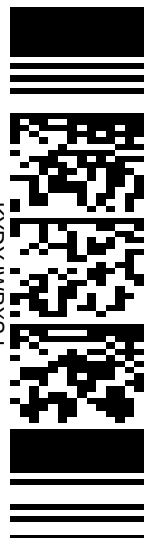


En Coyhaique, a uno de Julio del año dos mil veintiuno.

VISTO Y OÍDO:

Que, interpone recurso de nulidad, el Defensor Penal Juvenil, en la causa Rol Interno del Tribunal número O-16-2021, Rol Único de Causa número 2001113264-3, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, seguida por el delito de homicidio calificado, en contra del acusado menor de edad, 17 años, adolescente, de iniciales J.R.O.H., y en contra de otros dos acusados más, que no recurren. Recurso de nulidad que se interpone en contra de la sentencia definitiva, de fecha 21 de Abril del año 2021, dictada por los Jueces Titulares, don Pablo Andrés Freire Gavilán, quien presidió y por doña Rosalía Edith Mansilla Quiroz y doña Mónica Gisela Coloma Pulgar, en Juicio Oral Ordinario y por la que se condenó al citado acusado a la pena de diez años de Internación en Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social, como autor ejecutor directo, en un delito de homicidio calificado, del artículo 391, número 1, del Código Penal, con la circunstancia de alevosía, en grado de desarrollo de consumado, en contra de la víctima Rudy Catalán Catalán, perpetrado el primero de Noviembre del año dos mil veinte en Coyhaique, quien falleció el día 4 de Noviembre del mismo año, ordenándose la elaboración de un programa de intervención para el cumplimiento de la sanción, reconociéndole el abono de 167 días, por el tiempo que estuvo privado de libertad, a la fecha de dicha sentencia, sin costas.

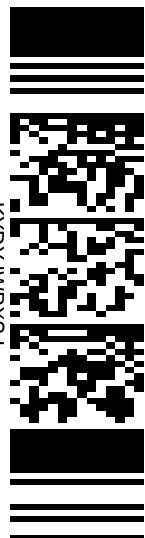
La recurrente invoca, como causales de nulidad, la principal, contenida en el artículo 373 letra b), del Código Procesal Penal, esto es, la errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con la no aplicación de las atenuantes de responsabilidad penal contempladas en el artículo 11, números 1, 4, 5 y 9, del Código



Penal; en subsidio, la del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 2, 20, 23 número 2, 24, 26 y 47, de la Ley 20.084, que habrían sido erróneamente aplicados en cuanto a la determinación de la naturaleza y extensión de la sanción aplicada a su representado J.R.O.H.

Respecto de la causal principal, como peticiones concretas, señaló: *“1.- Que el Tribunal ad-quem acoja el presente recurso por la causal invocada. 2. Que conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal proceda el Tribunal de alzada a anular sólo la sentencia y, dicte, sin nueva audiencia –pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo en la cual se disponga: a) Que se reconoce mi representado adolescente José Roberto Ojeda Haro las atenuantes de responsabilidad penal del artículo 11 N° 1, en relación con el artículo 10 N° 1, 11 N° 4, 11 N° 5, 11 N° 9, todas normas del Código Penal; rebajando en dos grados la pena asignada en abstracto al delito cometido condenando al joven a la sanción de Tres Años y Un Día de Internación en Régimen Semicerrado con programa de reinserción social; b) En subsidio, imponga la sanción Mixta de Tres Años y Un Día de Internación en Régimen Cerrado con programa de reinserción social más la de Dos Años de Libertad Asistida Especial.”* (SIC).

Respecto de la causal subsidiaria, del artículo 373, letra b), del Código del ramo, formuló, como peticiones concretas, las siguientes: *“1. Que el Tribunal Ad-Quem acoja el presente recurso por la causal invocada en forma subsidiaria. 2. Que conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, proceda el tribunal de alzada a anular sólo la sentencia y, dicte, sin nueva audiencia –pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo en la cual se disponga: a) Que se condena a mi*



representado José Roberto Ojeda Haro, como autor, de un delito de Homicidio calificado, en grado de ejecución consumado, a Tres Años Y Un Día de Internación en Régimen Semicerrado con programa de reinserción social. B) En subsidio, imponga la sanción Mixta de Tres Años Y Un Día de Internación en Régimen Cerrado con programa de reinserción social más la de Dos Años de Libertad Asistida Especial.”. (SIC).

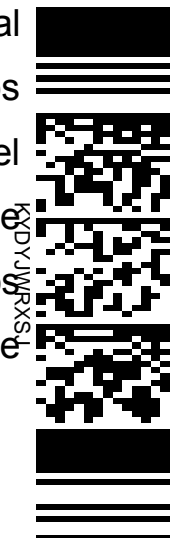
Peticiones y fundamentos, que repite en estrado, el abogado recurrente ya mencionado, por el Ministerio Público y por el rechazo del recurso, alegó el abogado don Sebastián Vildósola Fica, igualmente, por el rechazo del recurso, alegó, por la querellante particular, el abogado don Jaime Dagnino Martínez.

Y CONSIDERANDO:

Respecto de la causal principal invocada.

PRIMERO: Que, la recurrente, acerca de ésta causal, la fundamenta con la cita del considerando Octavo del fallo impugnado, que fijó los hechos que tuvo por acreditados el Tribunal, seguidamente, el delito, grado de desarrollo y autoría atribuida al recurrente, haciendo presente que en el motivo Décimo Noveno, el Tribunal no acogió las atenuantes del artículo 11, números 1, 4, 5 y 9, del Código Penal.

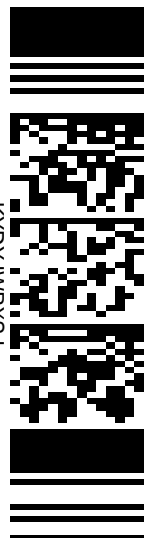
Seguidamente cita los antecedentes personales de su representado, de 17 años de edad a la fecha de los hechos, soltero, sin hijos, con 8° básico aprobado, de temprana edad vinculado al Servicio Nacional de Menores (Sename) y sus organismos colaboradores por medidas de protección decretadas por el Juzgado de Familia de Coyhaique, por haber sido víctima de negligencia (1), peligro material o moral (3), e inhabilidad de los padres, siendo su domicilio regular residencias dependientes y/o de administración exclusiva del Sename.



Luego, la recurrente cita el fundamento Décimo Noveno, de la sentencia contra la cual recurre y refiere, seguidamente, cada una de las atenuantes solicitadas, así:

Acerca de la del artículo 11, número 1, del Código Penal, aduciendo que si bien los antecedentes psiquiátricos acompañados responden a un ámbito de protección, dicen relación con el mismo sujeto a quien se dirige la intervención y que ha sido condenado, que fueron realizados por un profesional del área de la psiquiatría infanto juvenil, que dan cuenta de los múltiples factores que afectan el comportamiento del joven y los múltiples trastornos que sufre, citando cuatro de ellos, destacando que el informe de COSAM señala la discapacidad intelectual, observándose un desarrollo cognitivo operacional de entre 7 y 11 años, citando doctrina al respecto. De manera que, concluye, no es indispensable que exista una pericia psiquiátrica en el ámbito penal, como lo ha exigido el tribunal, para que los antecedentes aportados sean suficientes a fin de configurar la atenuante invocada ya que, en el solo informe psiquiátrico se señala un punto que por la doctrina ha sido señalado como suficiente para que exista una disminución en el reproche penal.

Acerca de la atenuante del número 4, del artículo y cuerpo legal citados, sostiene que la vindicación próxima de una ofensa grave queda acreditada no sólo con los dichos del propio joven quien refiere sobre la agresión sexual sufrida por su madre, sino que, precisamente por los del coimputado señor Monfil, a quien el Tribunal le reconoció la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal. El Tribunal, entonces, eleva el estándar de convicción respecto de un fundamento esgrimido por dos de los imputados señalando que debían haber mencionado sobre dicha agresión, además, los testigos que eran vecinos y también la coimputada que

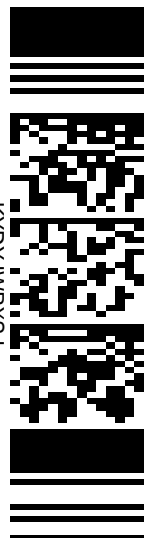


ejerció su derecho a guardar silencio, realizando con esto último un ejercicio de ponderación prohibida al entender como necesario renunciar a un derecho a fin de que pueda corroborarse lo manifestado por los otros dos coimputados.

Seguidamente se esmera el Defensor en presentar que el hecho de la agresión sexual, consistente en tocar los glúteos de la madre del joven, que fue absuelta, es una ofensa grave y el joven actuó de manera próxima, que trataba de vengar el daño provocado por el señor Catalán, en perjuicio de su madre y que fue lo que lo llevó al delito por el que fue sentenciado.

En lo relativo a la del número 5, del artículo 11, del Código Penal, requiere de un carácter emocional lo que estaría dado por el injusto del que tomó conocimiento el joven respecto de su madre, golpeando reiteradamente a la víctima producto de la rabia que en ese momento sintió, con su ánimo alterado y su razonamiento disminuido.

Cita los antecedentes que acompañó para acreditar las tres atenuantes mencionadas precedentemente, los que el Tribunal abordó desde un eje negativo haciéndole incluso reproche por no ser suficientes los programas de intervención anterior donde se encuentran aquellos pertenecientes al área de protección, precisamente porque el joven sufría vulneración de derechos como niño y luego como adolescente, citando parte del considerando Vigésimo de la sentencia al respecto, concluyendo, con que la sanción impuesta no se realiza desde una valoración del hombre medio o, en este caso, del adolescente medio, sino que además, se reprocha y castiga su procedencia, los padres que le fueron otorgados (sic) y el fracaso del sistema que no supo estar a la altura de las necesidades del niño y luego de un adolescente, por lo que

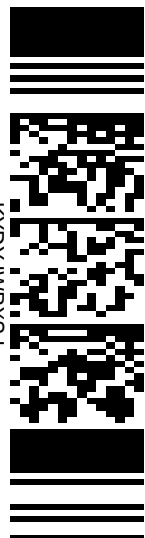


se le traslada la responsabilidad completa ahora que puede ser él el receptor del castigo penal.

Finalmente, y en cuanto a la atenuante del número 9, del artículo 11, del citado cuerpo legal, hizo presente que el joven realizó una declaración inculpatoria donde no elude su responsabilidad, entregando antecedentes claros para la acertada resolución del caso, especialmente para la acreditación de la calificante invocada en el delito de homicidio, sin embargo, sostuvo, que al Tribunal no le satisface lo aportado por el joven, citando las razones de los juzgadores para ello concentrándose, además, en las conclusiones del legista en cuanto no descartó la participación de más de una persona en las lesiones inferidas a la víctima, haciendo presente que todo queda concluido en base a que es el propio joven quien señala la cantidad y tipo de golpes que realiza en perjuicio de la víctima, excluyendo a cualquier otro agresor de las mismas y, en definitiva, es al único que se le termina condenando como autor directo de un delito de homicidio calificado, siendo absuelta su madre a quien se le había acusado en la misma calidad.

Cita doctrina sobre su postura, en orden a la sustancialidad de la cooperación, coherente con pasajes del coimputado al que se le reconoce esta atenuante, por lo que sostiene que se debe descartar la fórmula de supresión mental hipotética para considerar si la colaboración es sustancial o no, ya que el Tribunal determinó que la declaración de su imputado sólo vino a corroborar otros antecedentes.

Seguidamente, el defensor, cita el artículo 93, letra g), del Código Procesal Penal y 31, de la Ley 20.084, despojándose de su derecho a guardar silencio; el artículo 4, del Código del ramo, en cuanto hizo abandono voluntario de la presunción de inocencia que

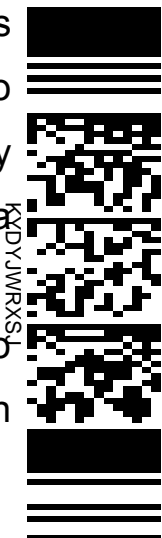


le favorecía, como otras disposiciones de la misma ley, en orden al interés superior, la directriz hacia la integración social de los infractores, lo que representaría parte importante su declaración inculpatoria como acto personal de asunción de responsabilidad, lo que afirmaría una aplicación más amplia de la atenuante en comento en relación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

SEGUNDO: Que, por su parte, el representante del Ministerio Público, abogado don Sebastián Vildósola Fica, manifestó en estrados, en lo relevante, que no existe error de derecho, a cuyo efecto citó y leyó el basamento Octavo de la sentencia recurrida, haciendo presente que el recurrente fue sentenciado por la unanimidad de los miembros del Tribunal, sosteniendo que no existe infracción a la normativa invocada por la Defensa, ya que las atenuantes invocadas podrían haber sido desestimadas, sin más, citando jurisprudencia de este mismo Ilustrísimo Tribunal respecto de la atenuante del número 9, del artículo 11, del Código Penal, en orden a que se habría determinado que es facultativo para el sentenciador su aceptación o rechazo, agregando que en el considerando Décimo Noveno, el Tribunal a quo explicó, razonada y fundadamente, el por qué no las concede.

Por su parte, la querellante particular, representada por el abogado don Jaime Dagnino Martínez, resumidamente, solicitó el rechazo del recurso puesto que éste sólo describe discrepancias con el razonamiento del Tribunal, el que, en el motivo Décimo Noveno, se hizo cargo de cada una de las atenuantes invocadas y motivó el por qué no las tenía como concurrentes, refiriéndose a cada una de ellas y a los fundamentos del Tribunal para ello.

TERCERO: Que, en lo que respecta al error de derecho anotado por el recurrente y que sustentaría su causal, radicaría en

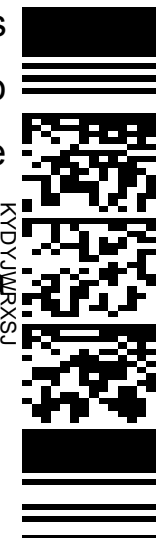


el hecho de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, no habría acogido las atenuantes que solicitó, esto es, las del número 1, 4, 5 y 9, del artículo 11, del Código Penal, en base a los argumentos que han sido previamente transcritos.

CUARTO: Que, resulta necesario volver a la naturaleza del presente recurso de nulidad, de derecho estricto, excepcional y circunscrito a las causales que determinadamente establece la ley, en el presente caso, las normas cuestionadas dicen relación con unas modificatorias de responsabilidad, de aplicación discrecional, casuística y de exclusiva competencia de los Jueces del fondo en base a los hechos por ellos determinados previamente. Esta sola circunstancia ya es suficiente como para desechar el recurso intentado.

Sin perjuicio, debe agregarse que la naturaleza jurídica de algunas de las atenuantes en cuestión, en sí mismas, ya es y han sido fuertemente cuestionadas, existiendo disímiles interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de su alcance, contenido y procedencia, ya se trate en el ámbito de adultos y con mayor fuerza y complejidad, tratándose de adolescentes, cuestiones que determinan, entonces, que no existe infracción a una norma clara y concreta, sino que se pretende recurrir en contra de una interpretación u opinión jurídicamente expuesta y debidamente fundada que luego de la aplicación de las normas relativas de determinación de pena resultó con una sanción al acusado, que los Juzgadores estimaron legal, justa y condigna, calificando un hecho como delito de acuerdo a la ley, aplicando una pena que corresponde y en un quantum adecuado.

Así, entonces, la impugnación se reduce a la procedencia meramente numérica o valórica de las atenuantes en cuestión.

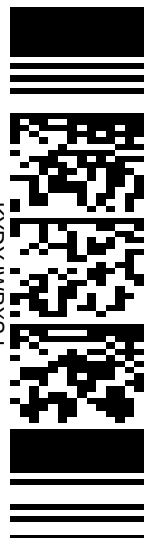


De la lectura del fallo impugnado, fundamento Décimo Noveno, se desprende que los sentenciadores, en una lata exposición de antecedentes y razonamientos, consideraron criterios, que difieren de lo que sostiene el recurrente, los que también sustento en juicio y que le fueron, en forma expresa y con la fundamentación que el caso requería, rechazados.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, parece, en este estado, prudente consignar lo que el Tribunal a quo consignó en su sentencia, en cuanto a los hechos que tuvo por acreditados, consignados en el motivo Octavo, que reza: *“Que el día 01 de noviembre de 2020, alrededor de las 06,00 horas, encontrándose la víctima Rudy Catalán Catalán en su domicilio, ubicado en calle Panguilemu N°1673 de la ciudad de Coyhaique, llegó al lugar Tomasa del Carmen Haro Vargas y posteriormente el adolescente J.R.O.H., y momentos después este último procede a golpear con un palo de escobillón a la víctima en la cabeza, partiéndose el palo, luego le quita a ésta un cuchillo que mantenía en el cinto, realizándole cortes en la cabeza, aprovechando el agresor que la víctima se encontraba sentada en un sillón, y que producto de su condición física y avanzada edad -80 años-, no tenía la posibilidad de levantarse de dicho lugar y repeler el ataque, actuando sobre seguro.*

Producto del ruido de la agresión, despertó Marco Monfil Cárdenas que dormía en una habitación del domicilio señalado, y en momento en que el adolescente agredía con el cuchillo a la víctima, se lo quita; procediendo Monfil Cárdenas a acomodar a la víctima en el sillón, y posteriormente, junto al adolescente y doña Tomasa salen del domicilio.

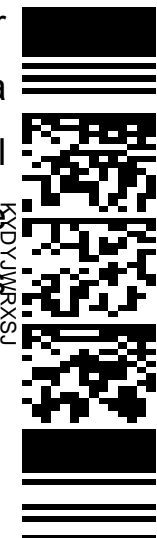
Sin embargo, el adolescente J.R.O.H. se devuelve al domicilio, y actuando sobre seguro ya que la víctima hacia herida



en el sillón, y nuevamente lo agrede con golpes de objeto contundentes, entre ellos una guitarra que quedó destruida en el lugar producto de la violencia utilizada, retirándose nuevamente del inmueble el adolescente, juntándose con las otras dos personas en la calle.

Posteriormente, el acusado Monfil Cárdenas facilitó su domicilio ubicado en el kilómetro 3 del sector El Arenal, para que el agresor el adolescente J.R.O.H., se ocultara, recibiendo noticias del estado de salud de la víctima, hasta que ésta finalmente falleció el día 04 de noviembre de 2020 a las 21,20 horas en el Hospital Regional de Coyhaique, producto de las policontusiones derivadas por la agresión.” (SIC).

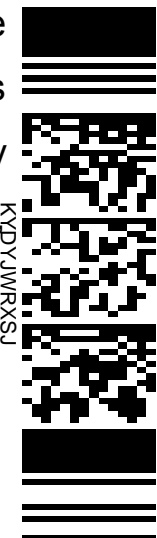
SEXTO: Que, conforme lo expresado, entonces, no se advierte que el fallo impugnado hubiere contravenido, primeramente, el texto formal del artículo 11 números 1, 4, 5 y 9, del Código Penal, seguidamente, tampoco se advierte una falsa aplicación de la ley, o sea, no se dejó de aplicar una ley cuando ello resulta evidente y finalmente, no se ha vulnerado el verdadero sentido y alcance de dicha norma jurídica. En consonancia con lo anterior, ¿Cuál sería el verdadero sentido y alcance de la norma en cuestión? El Tribunal de fondo, soberanamente, optó por su no consideración, emitió una opinión, entró a su análisis y valoración y determinar una eventual certeza jurídica al respecto, constituiría una opinión más, empero, la labor solicitada más bien parece ser una labor de competencia de otro Tribunal, así por lo demás lo ha consignado el inciso tercero del artículo 376 del Código Procesal Penal, en cuanto determina que es la Excelentísima Corte Suprema, la llamada a establecer y determinar los parámetros uniformes y claros que debieran regir en este tipo de materias.



SÉPTIMO: Que, no puede desconocerse que el Tribunal rechazó la concurrencia de las atenuantes del número 4 y 5, del artículo 11, del Código Penal, en orden a que el fundamento de origen, esto es, la presunta agresión sexual de la víctima a su madre, tocamiento del glúteo, que el menor no observó, es un hecho que no encuentra sustento con la prueba producida, la madre no declaró; si bien hay un testigo que dice haber oído al menor recriminarle aquella circunstancia, el Tribunal, con la debida ponderación de la demás pruebas allegadas, le resta valor probatorio a dicha declaración, de manera que los dichos del menor aparecen infundados y no se condicen con el resto de la prueba producida, sin perjuicio del desapego que el menor tenía con su madre.

Lo propio se argumentó respecto de la atenuante del número 9, del artículo y cuerpo legal citados, ésta fue rechazada reconociéndose que el acusado efectivamente colaboró, pero la misma colaboración no se estimó como sustancial para establecer los hechos y su participación toda vez que sólo corroboró lo que constaba de otros antecedentes.

Finalmente, respecto de la imputabilidad disminuida, no habiéndose explicitado cómo los trastornos que el adolescente sufre, afectaron su imputabilidad y la disminuyen, lo que ya es suficiente como fundamento del rechazo; sin perjuicio de que los informes presentados constituyen eso, un informe situacional y de evolución del tratamiento, lo que aplica para todos los informes allegados por la defensa, ninguno de los cuales tenía el valor y peso de una pericia, por lo que, justificada y razonadamente tampoco se accedió tener por concurrente la citada atenuante.



Con lo expuesto, entonces, no cabe otra opción que rechazar, el recurso de nulidad intentado por el Defensor Penal Juvenil en favor del adolescente sentenciado y así se declarará.

En relación a la causal subsidiaria invocada.

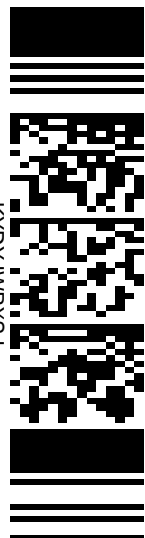
OCTAVO: Que, en subsidio de la causal principal ya analizada, la defensa del sentenciado deduce la causal genérica del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, por infracción a los artículos 2, 20, 23 N° 2, 24, 26 y 47 de la Ley 20.084, disposiciones que habrían sido erróneamente aplicadas por los sentenciadores, en relación a la extensión y a la naturaleza de la sanción aplicada a su representado.

A tales efectos cita y reproduce íntegramente el basamento Vigésimo de la sentencia, en el que el Tribunal discurre acerca de la pena condigna que habría de ser aplicada al acusado, en los términos de la Ley 20.084.

Estima el recurrente se habría infringido el artículo 2, de la Ley 20.084, en cuanto lo esencial es el interés superior del adolescente y la sanción de Régimen Cerrado no asegura dicho interés ya que presenta multiplicidad de factores que necesitan ser abordados desde la reparación, con la supervigilancia de un centro privativo de libertad, en este caso, de Internación en Régimen Semicerrado.

Sostuvo infracción al artículo 20, de la especial ley citada, en cuanto la sanción consiste en una intervención socio-educativa amplia y no es un castigo y está orientada a la vida en libertad, no siendo la sanción impuesta la más idónea a tales fines.

Infracción a los artículos 26 y 47, de la Ley 20.084, en cuanto la privación de libertad se utilizará sólo como último recurso y de carácter excepcional, no siendo necesario en el presente caso recurrir a este último recurso, máxime, como dice el recurrente, es el propio Tribunal quien advierte que la sanción podría considerarse



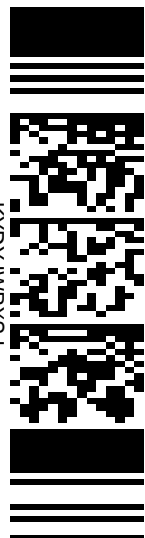
excesiva, de lo que concluye que el período de diez años no se encuentra claramente establecido como el idóneo o adecuado para la adecuada resocialización del joven, considerando, además, que el Tribunal advirtió de la posibilidad de un cumplimiento anticipado.

Asimismo citó infracción al artículo 23, en relación al artículo siguiente de la misma ley, analizando cada uno de los parámetros que establece este artículo. Así, refirió, respecto de la letra a), del artículo 24, de la Ley 20.084, que éste delito, si bien es grave, no es de los más graves; sobre la letra b), sostuvo que el joven si bien cometió el ilícito que se le imputa, fue debido a que estuvo impulsado por un móvil poderoso; letra c), se refiere a las mismas atenuantes que alegó y le fueron negadas; d), acerca de la edad del infractor, de 17 años, pero sin antecedentes por delitos violentos; e), en cuanto a la extensión del mal causado no habría sido acreditado por el Ministerio Público ni por el querellante; f), en cuanto a la idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social, sostuvo que debe considerarse la internación en régimen semicerrado, en atención a todo lo precedentemente expuesto.

Seguidamente cita jurisprudencia con mención a determinados fundamentos de dichas sentencias.

NOVENO: Que, el Ministerio Público, sucintamente, alegó por el rechazo, también, de esta causal, en atención a que no existe infracción a las normas de determinación de penas, ya que el Tribunal precisó al respecto y por lo tanto se trata de una sentencia clara, completa, con razón suficiente, que es unívoca y sin infracción a norma legal alguna.

Por su parte, el querellante particular, expresó que esta causal, también, debía rechazarse porque no hay infracción a la Ley



20.084, ya que en el considerando Vigésimo, el Tribunal razonó acerca de la determinación de la pena, aplicando con rigor el artículo 24, de dicha ley y explicitó acerca del por qué impuso la pena por la que fue sancionado el menor.

DÉCIMO: Que, acerca de las infracciones a las disposiciones legales que cita el recurrente, habrán de analizarse una a una, sin perjuicio de que es necesario hacer presente lo que el Tribunal dijo al respecto en el motivo Vigésimo.

Por el artículo 21, de la Ley 20.084, aplica la rebaja quedando la pena en presidio mayor en su grado medio, de 10 años y un día a 15 años; por el artículo 23, número 1, la pena a aplicar sería de Internación en Régimen Cerrado o Semicerrado, en ambos casos con programa de reinserción social, considerando un límite máximo de diez años por ser el acusado mayor de 16 años. Por el artículo 22, al no haber agravantes ni atenuantes, no hay rebaja susceptible de ser aplicada y por el artículo 24, atendidas las razones que explicita, concluye con que la sanción más idónea es la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Sostuvo que el delito es de los más graves que prevé el ordenamiento jurídico, homicidio calificado por alevosía, como autor ejecutor directo en el delito imputado, consumado, con adolescente cercano a la mayoría de edad (17 años y un mes a la fecha de los hechos) y con gran extensión del mal causado; sanción idónea en base a la misma documental aportada por la defensa para la necesaria reinserción del joven, atendido, además, el fracaso reiterado de intervenciones previas, sin perjuicio de la posibilidad, futura, de sustitución de la pena.

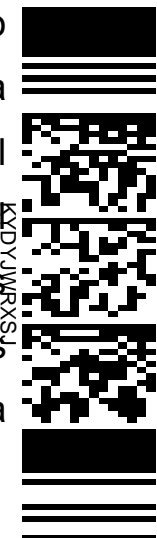
UNDÉCIMO: Que, primeramente, la presunta infracción al artículo 2, de la Ley 20.084, en cuanto a la consideración del interés superior del adolescente para la imposición de la sanción. Es



precisamente, dicha circunstancia que el Tribunal tuvo en consideración para determinar la pena en la sanción que impuso, dado que, la trayectoria de vida del menor, transparentada a través de la misma documental que la defensa acompañó, pueden apreciarse, entre otras cosas, la dependencia y el abuso del alcohol, de manera que su reinserción en libertad, atendido el fracaso de las múltiples intervenciones a que ha sido sujeto en su corta extensión de vida, han sido infructuosos, todo aconseja, precisamente considerando el interés superior del adolescente, que éste cumpla con el respectivo programa de reinserción a partir de una privación de libertad.

Que, la eventual infracción al artículo 20, del cuerpo normativo citado, ha de concordarse, también, con el precitado artículo 2, en cuanto la sanción debe formar parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, de manera que con lo resuelto, tampoco se observa infracción a esta norma.

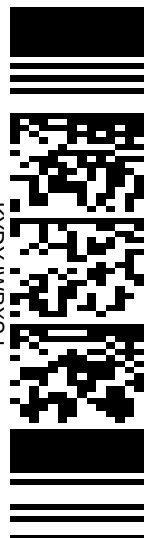
En lo relativo a la presunta infracción a los artículos 26 y 47, de la Ley 20.084, en cuanto al carácter subsidiario de las penas privativas de libertad a los adolescentes, en tanto deben utilizadas sólo como medida de último recurso; efectivamente, atendidos los razonamientos precedentes, los que enunció el Tribunal y el mérito de la documental allegada por la defensa, son circunstancias que ameritan que es ésta, sin duda alguna, la medida de último recurso que ha de imponerse, por lo que, tampoco se advierte alguna infracción a los preceptos mencionados; y la advertencia del Tribunal a una eventual sustitución o remisión de la pena en el futuro, cumplidas que sean los requisitos que disponen los artículos 53, 54 y 55, de la Ley 20.084, es la mera enunciación de los derechos que la ley brinda a los adolescentes, sin que pueda



atribuirse otras intenciones o imperfecciones a la sentencia impugnada.

Finalmente, en lo que respecta a la infracción del artículo 23, al igual que la pretendida aplicación errónea del artículo 24, ambos de la Ley 20.084, son disquisiciones que el recurrente formula a través de sus propios supuestos que no tienen apoyo o sustento en los hechos acreditados por el Tribunal, los que no discute. En efecto, estima infraccionado el artículo 23, número 2, sin embargo, parte del supuesto, exclusivamente propio, que la pena partiría de tres años y un día a cinco años; sin embargo, la disposición aplicada es la regla del número 1, esto es, si la extensión de la pena supera los cinco años de privación de libertad, norma que hace imperativa la aplicación de un régimen cerrado con programa de reinserción social.

En lo relativo a las normas y criterios de determinación de pena del artículo 24, letra a), el recurrente reconoce que el delito es grave; letra b), reconoce igualmente que el delito está consumado y que participó como autor ejecutor directo, sin embargo, insiste en que habría actuado por un móvil poderoso, que nunca se tuvo por acreditado; c), la concurrencia de atenuantes o agravantes, que el tribunal estimó no concurrían, sin embargo el recurrente insiste en su consideración; d), la edad del infractor, tenía 17 años y un mes, pero lo excusa manifestando que no tiene antecedentes vinculados a delitos violentos, cuestión que nada tiene que ver con la letra que se dice infraccionada; e), sobre el mal causado con la ejecución del delito, arguyendo que ni el Ministerio Público ni el querellante acreditaron dicho mal; más, resulta difícil entender cómo se sostiene infracción a esta letra, si nos encontramos con un hecho cierto, comprobado y acreditado, de que la víctima, a raíz de la conducta del acusado, perdió la vida a raíz de una lata agresión que

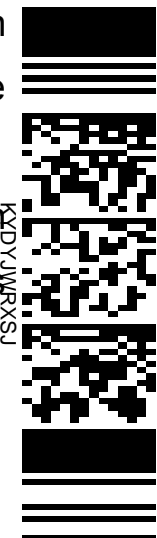


fue considerada con la agravante de alevosía. Acerca de la última letra ni siquiera explicita cómo se habría infraccionado dicha norma, aludiendo que la sanción aplicable, por lo expuesto, era la de régimen semicerrado.

DUODÉCIMO: Que, la presente causal, por infundada, por no ser efectiva la infracción respecto de ninguna de las disposiciones que se dijeron violentadas y atendida la falta de fundamentos y a la liviandad con que se planteó, amerita que el recurso de nulidad, por esta segunda causal invocada, habrá de ser, también, rechazado.

Y TENIENDO PRESENTE, las disposiciones legales citadas y lo previsto en los artículos 352, 358, 372, 373 letra b), inciso segundo del artículo 376, inciso segundo del artículo 377, 382 y 384 del Código Procesal Penal y Ley 20.084, **SE DECLARA SIN LUGAR Y SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por el Defensor Penal Juvenil ya mencionado, en contra de la sentencia dictada con fecha veintiuno de Abril del año dos mil veintiuno, mediante la cual se condenó al adolescente J.R.O.H., de ser autor del delito consumado de homicidio calificado por alevosía, del artículo 391, número 1, del Código Penal, perpetrado el día primero de Noviembre del año dos mil veinte en la ciudad de Coyhaique, en perjuicio de la víctima Rudy Catalán Catalán, a la sanción de Diez Años de Internación en Régimen Cerrado con Programa de Reinserción Social, pronunciada por los Jueces de la Sala Única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, la que, en consecuencia, no es nula, como tampoco el Juicio Oral en la que se dictó.

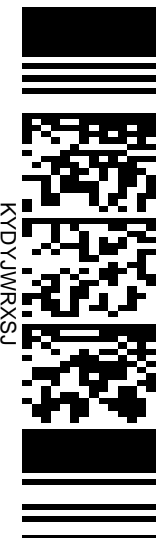
Regístrese, notifíquese, dese a conocer a los intervinientes en el día y hora señalados y devuélvanse los antecedentes pertinentes.



Redacción del Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro
Espinoza.

Rol I. C. número: 147-2021.-

R.U.C. número: 2001113264-3.-



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministra Presidente Natalia Rencoret O. y los Ministros (as) Sergio Fernando Mora V., Jose Ignacio Mora T., Pedro Alejandro Castro E. Coyhaique, uno de julio de dos mil veintiuno.

En Coyhaique, a uno de julio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

